

*Ejecutoria de la Suprema Corte
de Justicia.*

México, Octubre 13 de 1875.—Visto el juicio de amparo promovido por el C. Lic. Antonio Inclan, en representación de los ciudadanos (aquí se citan los nombres expresados en la sentencia anterior) vecinos del pueblo de San Lorenzo Tepaltitlán, de la municipalidad de Toluca, ante el Juzgado de Distrito del Estado de México, contra la sentencia pronunciada por el Juez 2º Conciliador de dicha Ciudad, así como contra los procedimientos que tuvieron lugar en el juicio que les promovió el pueblo de San Mateo Otzacatipan, sobre restitución del llano de San Lorenzo, que les había sido adjudicado con arreglo á las leyes, juzgando que con dichos procedimientos y sentencia, se violan las garantías que otorga la Carta fundamental en sus arts. 14 y 16.

Visto el informe de la autoridad responsable del acto reclamado; la prueba rendida por los quejosos; el pedimento del ciudadano promotor fiscal, y todo lo demas que de autos consta y se tuvo presente, se declara: que es de confirmarse y se confirma por los propios legales fundamentos, la sentencia pronunciada por el Juez de Distrito del Estado de México en 11 de Setiembre último, que declaró: que la Justicia de la Union ampara y protege á los quejosos contra la sentencia pronunciada por el Juez 2º conciliador de Toluca en 3 de Junio del presente año y procedimientos que lo precedieron.

Devuelvânse las actuaciones al Juzgado de su origen con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes. Hágase saber, publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal Pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—Presidente, *José Arteaga*.—*Ignacio M. Altamirano*.—*M. Auza*.—*Ignacio Ramírez*.—*E. Montes*.

J. M. Vigil.—*H. Surovil*.—*S. Guzmán*.—*L. Velazquez*.—*H. Savala*.—*José García Ramírez*.—*Manuel Alas*.—*Enrique Landa*, secretario.

Es copia que certifico. México, Enero 8 de 1876.—*Enrique Landa*, oficial mayor.

AMPARO.

Promovido ante el juzgado de Distrito de Puebla por el C. Lic. Joaquín Ruiz, contra los procedimientos de la jefatura superior de Hacienda en el Estado, que, usando de la facultad económico coactiva, ha embargado una casa de la propiedad de los quejosos.

SENTENCIA DEL C. JUEZ DE DISTRITO.

Puebla, 24 de Agosto de 1875.

Visto el presente juicio de amparo promovido por el C. Lic. Joaquín Ruiz contra la jefatura de hacienda de este Estado, por el embargo que decretó y ejecutó respecto de la casa núm. 18 de la calle de la Compañía: visto el escrito de queja con los testimonios que se adjuntaron; el informe de la autoridad responsable; el parecer fiscal; las pruebas rendidas; lo alegado; y cuanto ha debido tenerse presente y verconvino.

Considerando: que aunque la jefatura de hacienda procedió al secuestro de la finca que se dice reconoce al erario federal el capital de cinco mil seiscientos setenta y seis pesos sesenta y seis centavos, por orden de la tesorería general de la Nación, no debió sin embargo, haber usado de la facultad económico coactiva, supuesto que no se trataba de un derecho claro e indudable á favor de la hacienda pública, atenta la oposición del promovente, fundada en la cancelación de la escritura respectiva.

Considerando: que desde el momento que el propietario C. Lic. Joaquín Ruiz;

se opuso al embargo referido, el negocio se hizo contencioso, y la oficina responsable debió consignarlo al juzgado de Distrito para su resolución; una vez que ya en ese estado, carece de facultad para dictaminar.

Considerando por último: que supuesto el razonamiento anterior, la jefatura de hacienda al llevar adelante sus procedimientos, se ingirió en asunto que no era de su resorte, por falta de competencia, y que al hacerlo así, inconcuso es que violó en la persona del solicitante la garantía individual otorgada en el art. 16. del código fundamental de la república; con fundamento de todo lo espuesto y de la frac. 1ª art. 19 de la ley de 20 de Enero de 1869, reglamentaria de los arts. 101 y 102 de la Constitución, el suscrito juez resolver: que la justicia de la Unión ampara y protege al C. Lic. Joaquín Ruiz, contra el acto de la jefatura de hacienda que dió lugar á la interposición del presente recurso. Hágase saber; publíquese esta sentencia en el periódico oficial respectivo y Semanario Judicial de la Federación; y remítase el expediente á la Suprema Corte de Justicia para la revisión de los procedimientos. El ciudadano juez de Distrito definitivamente juzgando, lo proveyó, mandó y firmó.—Doy fé.—*Antonio Rivero.*—Ante mí.—*Antonio G. Mozqueira.*

Es copia que certifico para su publicación en el Semanario Judicial de la Federación.—Puebla, Agosto 25 de 1875.—*Antonio G. Mozqueira.*

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Octubre catorce de mil ochocientos setenta y cinco.—Visto el recurso de amparo promovido ante el juzgado de Distrito de Puebla, por el C. Lic. Joaquín Ruiz, contra los procedimientos de la jefatura superior de hacienda en el Estado, que, usando de la facultad económico coactiva, le ha em-

bargado una casa de su propiedad marcada con el núm. 18 en la calle de la Compañía de Puebla, para hacer efectivo el pago del capital que quedó reconociendo esa finca al erario federal, al ser adjudicada conforme á las leyes de nacionalización de los bienes que administraba el clero, creyendo el quejoso que con esos procedimientos se vulneraban en su persona las garantías consignadas en el art. 16 de la Constitución de la República, por no existir causa legal para el empleo de las facultades económico coactivas, en razón de ser, además de ilíquido, cuando menos dudoso el crédito del Fisco. Vistos, el informe de la autoridad en que manifiesta: que si bien había sido cancelada la escritura de reconocimiento del capital mencionado, no existía ni en la jefatura de hacienda, ni en el ministerio del ramo, constancia de la orden en virtud de la cual se decía hecha la cancelación, así como tampoco estaban amortizados los pagarés otorgados por el adjudicatario, motivo por el cual se consideraba como subsistente el adeudo, y enteramente legal el procedimiento empleado para hacer efectivo su pago: las pruebas rendidas al efecto: lo alegado por las partes: el fallo del juez de Distrito, con cuanto mas se tuvo presente y ver convinco, y

Considerando: que la ley de 20 de Enero de 1837 que autoriza á las oficinas recaudadoras para emplear los procedimientos económico coactivos en el cobro de los créditos fiscales, limita esa facultad al caso en que la deuda sea clara é indudable; que el derecho del erario federal, con respecto al capital cuyo pago se exige al solicitante, carece de esas circunstancias, pues ha sido cancelada la escritura de reconocimiento de ese capital: que las presunciones sobre falsedad de la orden del gobierno general, para proceder á la cancelación, no pueden hacer perder su fuerza probatoria á una constancia fehaciente, mientras por el Tribunal respectivo no se hubiera decidido sobre su validez ó nulidad: que no siendo la jefatura de ha-

cienda el Tribunal competente para dictar esa resolución, ha violado con sus procedimientos una de las garantías que consigna el art. 16 constitucional.

Por estas consideraciones y con fundamento de los arts. 101 y 102 de la Constitución de la república, se decreta: Que es de confirmarse y se confirma la sentencia pronunciada por el Juez de Distrito de Puebla, en 24 de Agosto del presente año, y se declara: que la justicia de la Unión ampara y protege al C. Lic. Joaquín Ruiz, contra los procedimientos coactivos de la Jefatura superior de hacienda en el Estado, que han dado origen á este recurso, sin perjuicio de las legítimas facultades del C. Juez de Distrito, á quien ha pasado el conocimiento del negocio, para proceder con respecto á él, en la forma prescrita por las leyes.

Devuélvanse las actuaciones al Juez de Distrito que las elevó á revisión, acompañándole testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes: publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por mayoría de votos lo decretaron los ciudadanos Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José María Iglesias.*—*José Arteaga.*—*José María Lozano.*—*M. Auza.*—*Ignacio Ramírez.*—*E. Montes.*—*José María Vigil.*—*Miguel Sandoval.*—*Simon Guzman.*—*L. Velazquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Enrique Landa*, secretario

Es copia que certifico. México, 7 de Enero de 1876.—*Enrique Landa*, oficial mayor.

AMPARO

Promovido por D. Adolfo O'Ryan ante el juzgado de Distrito de Sinaloa, contra el administrador de la aduana terrestre de Mazatlan que le exige pago de derechos por introducción de cincuenta y dos tercios de mantas, procedentes de la fábrica de Jauja.

PEDIMENTO FISCAL.

C. Juez de Distrito:

El promotor fiscal se ha impuesto del escrito por medio del cual el Sr. D. Adolfo O'Ryan, intenta el recurso de amparo contra los actos del ciudadano Administrador de la aduana terrestre, que le retiene cincuenta y dos tercios de mantas del país y le exige pago de alcabala sobre esas mantas, fundando sus procedimientos en el decreto expedido por el Ejecutivo de Sinaloa con fecha 12 de Abril próximo pasado, alegando el quejoso violación de los artículos constitucionales 16 y 27 y desobediencia al precepto de la fracción 9ª artículo 72 de la Constitución.

El ocurrente dice, que se le expropia de la gracia que por ocho años contados desde 1869 gozan las mantas del país, conforme á las leyes de la Legislatura de Sinaloa, y en cuanto á la violación del artículo 16, dice que el decreto citado, no obliga por haber sido expedido por el Gobernador, contraviniendo lo preceptuado por la Constitución general en su artículo 50: y añade, que se desobedece la fracción 9ª del artículo 72 y la ley general de 2 de Mayo de 1868.

Por falta del informe de la autoridad ejecutora, el fiscal se concreta á examinar la validez del decreto de 17 de Abril último; y en su concepto, el amparo debe otorgarse.

Con efecto, la contravención del artículo 50 del Código fundamental es evidente, pues el gobernador del Estado, siendo solo ejecutivo, expide disposiciones con carácter